

EL DEBATE CON EL PRETEXTO DE LA REFORMA EDUCATIVA DE 1992 Y LO QUE REVELA DE MÉXICO

BERNARDO MABIRE PONCE

ASÍ COMO CADA CÉLULA CONTIENE ÍNTEGRO EL PROGRAMA genético que confiere singularidad al organismo del que forma parte, toda política estatal, aislada para un análisis que destaque su contenido, la manera de adoptarla y, sobre todo, la reacción que provoca en la opinión pública, ofrece información completa respecto al sistema político del que emana y a las relaciones simbióticas del mismo con la sociedad en la que está arraigado. Las políticas culturales, pese a que no siempre tienen límites precisos debido a la variedad de sus instrumentos y ámbitos de acción, son particularmente útiles para explorar los cambios –o su falta– en la mecánica de un país a lo largo de los años. Valga definir las como aquellas que agrupan acciones del Estado, basadas en el uso de medios de difusión, cuyo propósito sea influir en la psique colectiva con miras a crear dos elementos indispensables para la vida de cualquier sociedad: la imagen del país y el sentimiento de identidad nacional al que sirve la primera como marco de referencia. Forjarlos no ha sido empresa fácil en México, y por eso los altibajos de ese empeño –de acuerdo con modas ideológicas que no siempre alteran el sustrato medular del credo oficial, aunque dicten cambios de matiz– encierran las mejores posibilidades de modificar curso y ritmo de la integración nacional.

En mayor grado, tal vez, que lo común, en nuestro medio las políticas culturales –todas esporádicas, salvo la que me propongo analizar– se han convertido también en elemento importante de legitimidad de la clase gobernante, que por largo tiempo manifestó su presunto compromiso de construir la nación con base en encauzar su desarrollo. Pero como esa legitimidad dista mucho de gozar de reconocimiento absoluto,

en parte porque la acción del régimen ha tenido deficiencias, y más aún porque persiste la oposición de grupos que por principio rechazan la tesis de un Estado constructor, hay una razón adicional para estudiar las políticas culturales: que son la "prueba de fuego" para los límites de la participación estatal en la vida del país. La paradoja medular de México es que la organización política y social que lo salva de desintegrarse podría ser la misma que le impide su pleno florecimiento. Por eso continúa la controversia respecto a cuáles son los linderos óptimos entre el ámbito público y el privado, porque hay elementos de verdad tanto en señalar que la intervención del Estado en la economía y otras esferas va asociada con la perpetuación de rasgos opresivos del sistema político, como en advertir que esa injerencia ha combatido otras opresiones arraigadas en antiguas relaciones sociales de dominación. Si el Estado optara por proseguir labores constructivas o iniciarlas en áreas donde nunca existieron más que de modo imaginario, quedaría aún por establecer la frontera entre guiar y controlar. Nunca ha sido simple la elección, porque tan necesario es inducir la uniformidad indispensable para desarrollar la planta productiva como parece justo respetar la diversidad de los grupos que forman el país, y es igual de probable que la búsqueda de homogeneidad necesaria degenerare en defensa del autoritarismo o que la preocupación por mantener diversidad cultural legítima sirva de pretexto a la apología de desigualdades inadmisibles.

Pero al margen de preferencias ideológicas individuales, sin duda la definición de México que proponen sus gobernantes es el corazón de los proyectos oficiales para guiarlo, y el hecho de "moldear" la imagen del país en los programas educativos, por ejemplo, permite a las autoridades anticipar giros de sus políticas o, las más de las veces, justificar los que han ocurrido ya. De ahí que las políticas culturales sean elemento privilegiado para discernir una voluntad de cambio ecléctico de la clase dirigente en los últimos decenios, que ha insistido en mantener inalterados algunos rasgos de la organización nacional para facilitar la transformación de otros. Además, el estudio de la forma en que se adoptan estas políticas y se llevan a la práctica brinda una buena radiografía del funcionamiento de las instituciones públicas, así como de las relaciones que establecen entre sí y con grupos fuera del sistema, si es que alguno escapa realmente al impulso englobador de un aparato de gobierno que, en reacción contra el legado histórico, al consolidarse después de la lucha revolucionaria insufló vida a la población paralizada y después no pudo o no quiso disolver los vínculos resultantes de muy estrecha dependencia mutua, de los cuales aquélla se hizo cómplice.

Estos lazos entre Estado y sociedad, que son el objeto del presente artículo, además de que permiten caracterizar el clima del momento estudiado son un excelente indicador de la evolución política —o de la involución— al paso del tiempo, cuando se comparan las reacciones de la parte más activa de la opinión pública frente a ciertas medidas gubernamentales con las que produjeron acciones análogas en el pasado. Finalmente, dado que las políticas culturales dependen de los recursos financieros disponibles, es razonable inferir de su estudio un recuento esquemático de historia económica, y como los intentos por forjar una identidad nacional son toma de posición frente al exterior, el examen de iniciativas que atañen a la cultura puede servir a la vez para delinear el contexto mundial en el que actúa México y los límites que le impone.

En lo que se refiere específicamente a las políticas para la educación primaria, destacan por ser las únicas que han tenido continuidad desde 1960; deben esto a los libros escolares “únicos” y gratuitos, difusores de las normas que el Estado desea reproducir entre las generaciones jóvenes. De ahí que el contenido de esos textos sea resumen perfecto de la ideología oficial y refleje sus cambios —más superficiales a veces que lo que desea el presidente de la república o quiere imaginar el público— a la par de sus contradicciones perpetuas. Es entonces natural que la carga simbólica de los manuales los vuelva objeto de controversia cada vez que una reforma —en consonancia con los fantasmas personales del mandatario que ordena una versión nueva, deseo de consagrar lo que anhela fuese un giro ideológico bastante marcado para pasar a la historia— altera el contenido de la instrucción pública, aunque sea en grado menor; el debate subsecuente ofrece la medida de la fuerza del sistema político en conjunto, porque la pone a prueba, así como permite evaluar cambios en las alianzas del Estado con varios grupos y detectar innovaciones o permanencia de las estrategias de aquél para negociar con éstos.

Pero no deja de ser paradójico que los textos oficiales ahonden divisiones, ya que los distribuye la SEP con el objeto de difundir conocimientos básicos para inducir consenso respecto a valores mínimos, que a su vez sirva de base a la identidad mexicana tal como desea forjarla el régimen. Si bien los críticos de derecha estiman que esto no es necesario, por suponer que la mexicanidad existiría de suyo, el ofrecimiento estatal de darle forma —más allá de la polémica respecto a qué la constituye y cómo se ha gestado— parecería justificable en un país desgarrado por su herencia de divisiones, donde el Estado precedió a la nación y tomó a su cargo la tarea de inventarla a su manera. Más paradójico aún —pero no exento de lógica, porque hacer escándalo para

obtener ventajas es rasgo de la política en todas partes, acentuado en los sistemas autoritarios— es que, a raíz de las reformas educativas que culminaron en la edición de nuevas versiones de los libros, la intensidad de las controversias haya nutrido la ilusión de que cada serie renegaba de la anterior e innovaba radicalmente la visión oficial de México, en función de ideas o intereses del Ejecutivo en turno. Sin duda hay diferencias que reflejan los gustos del patrocinador de cada serie, pero están concentradas en porciones de texto bien delimitadas, sobre todo en las que tratan de la economía de México y de sus relaciones con el exterior. No por casualidad son éstas las áreas que han deseado renovar los gobiernos, aunque fuera por medio de propiciar la rigidez del orden político y social: de ahí que la mezcla de innovación y permanencia en los textos escolares, a primera vista contradictoria, corresponda fielmente a las ambigüedades de la realidad empírica, que son la clave de su permanencia. En contraste con la voluntad de cambio selectivo, el afán de continuidad se detecta, por ejemplo, en que —abstracción hecha de detalles secundarios— las grandes líneas explicativas de las etapas fundamentales en la historia nacional se mantienen constantes en los libros de texto gratuitos de 1960-1965, 1974-1975 y 1992, excepto por los vaivenes de los juicios respecto a la dominación española.

Sin que caiga en el indigenismo extremo, es llamativo el énfasis de la serie de 1992 en los aspectos destructivos de la conquista.¹ El resto de la crónica histórica tiene gran parecido, en lo esencial, con la de los manuales de los años sesenta y setenta. Las tres series —que coinciden en su descripción de la colonia como un periodo de logros artísticos e intelectuales, pero también de opresión que se volvió insostenible— son igual de renuentes a profundizar en el análisis social de la guerra de independencia y concuerdan en alabar las leyes de reforma. En cuanto a la reseña de la revolución, la propuesta en los manuales de 1992 de que “los jefes revolucionarios querían distintas cosas, tanto que podemos decir que hubo muchas revoluciones” (p. 113), es mucho menos audaz de lo que podría parecer si consideramos que el antagonismo entre villistas y zapatistas, por una parte, y carrancistas, por otra, estaba expuesto en las dos series precedentes. En virtud de estas semejanzas no es de extrañar que la versión de 1992 haya mantenido

¹ A partir de aquí, las páginas correspondientes a las citas del libro de texto de 1992 para quinto y sexto grados aparecen entre paréntesis. El manual para cuarto año no se cita en virtud de que fue derivación del otro.

inalterado el panteón de héroes (Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Zapata, Villa). Lo mismo vale por la lista de villanos (que encabezan Cortés y Santa Anna). Siguió en marcha, por otra parte, la rehabilitación de Maximiliano, pero nada indica, a la luz de un análisis comparativo, que la tercera serie se propusiera reivindicar a Porfirio Díaz.

Tampoco ha tenido grandes fluctuaciones el programa ético asociado con la interpretación oficial de la historia, cuyos elementos medulares son la defensa de la unidad nacional más allá de las diferencias sociales y el respeto por el gobierno y las leyes, en el entendido de que, si bien los conflictos determinan la historia, también los ideales de orden son constante universal. Los libros de 1992 hacen muy pocas referencias a la vida política interna del México de hoy, como para que nada perturbe sus rasgos medulares, entre las que resalta el comentario de que la Constitución de 1917 otorgó “[...] mayor fuerza al poder Ejecutivo [...] apoyándose en la experiencia histórica” (118). Es muy pobre, igualmente, su conceptualización de la organización social en México, en la que destaca la insistencia muy marcada en el papel de las clases medias, destinatarias implícitas de mensajes que insisten en el retorno a la estabilidad con base en exorcizar el presunto radicalismo del programa anterior. Parece mucho más elaborada, por contraste, la representación de la vida económica, que concentra varias de las auténticas innovaciones de los libros estudiados. Aquí se manifiestan con suma claridad los objetivos de Salinas (así como los de presidentes anteriores se reflejaron en apartados sobre economía en los volúmenes para primaria respectivos), pues en vez de insistir, como antaño, en las virtudes de la independencia económica, los manuales de 1992 califican la apertura comercial iniciada en el sexenio de De la Madrid como “cambio fundamental en el México del siglo xx” (p. 151), cuya lógica subyacente propone que el contacto con la economía internacional —en vez de la acción del Estado— sea la fuerza motriz del desarrollo interno, entre otras razones porque en el gasto público estaría la raíz de toda penuria.

Congruentes con esa profesión de fe, los manuales analizados manifiestan más interés en transformar las relaciones del país con el exterior que en alterar los vínculos entre los mexicanos, como era en la práctica la intención de Salinas. De ahí que prescindan de las ideas anticolonialistas y superen la desconfianza frente al mundo, que en los libros anteriores se entrelazaba con una vocación internacionalista de otro signo ideológico, latinoamericanista primero y después tercermundista. En la versión de 1992, Estados Unidos puede ser socio confiable de México, porque hay antecedentes de cooperación fructífera,

cuya enumeración fortalece esa creencia sin que haga falta ocultar los antiguos conflictos entre ambas naciones ni reinterpretar la historia mexicana, menos aún en vista de que se desea cambiar la visión del futuro, no la del pasado. Lejos de subestimar la guerra de 1847, los libros reservan sus pocas palabras emotivas para decir que la mayor desgracia de México en el siglo XIX “[...] fue la humillación militar y la pérdida del territorio nacional” subsecuente (p. 79). Tampoco la crónica de la revolución oculta las intervenciones de Estados Unidos en esa contienda, sino que insinúa incluso, por primera vez, que el reconocimiento del gobierno vecino habría sido decisivo para el triunfo de Carranza (p. 115).

Sin embargo, esas propuestas innovadoras suelen estar formuladas en frases muy breves que se diluyen en un conjunto de ideas tradicionales, donde se confirma buena parte de un añejo credo reconocible por la estabilidad de sus principios esenciales, que se espera hacer compatibles con los que se le añaden. Frente al esfuerzo por dar nuevas connotaciones al nacionalismo oficial para hacerlo congruente con giros de las políticas del Estado que redefinieron su papel en áreas selectas, la pregunta obligada —sean realistas o no los fundamentos de la nueva estrategia económica, no se hable de su eficacia— se refiere a cuánto pueden manipularse los conceptos sin hacerlos estallar. Pero más que los cambios parciales en la orientación de los textos, destaca un empeño subyacente por complacer a los críticos de la educación pública en general y de enseñanzas específicas (concretas o imaginadas) de los libros anteriores, por medio de ofrecer algo que aspiraba a ser reinterpretación radical de la historia y de la realidad presente de México, o que en todo caso las autoridades educativas presentaron como tal, con el pretexto de remediar supuestas deficiencias de los programas previos, que criticaron duramente. A la luz de un examen minucioso de los textos publicados en el sexenio de Salinas no se consiguió ese propósito de transformación profunda, en parte por la inercia del legado ideológico recibido, que presumiblemente impidió transformarlo hasta el punto deseado; otra razón es que las reformas del gobierno en ciertos rubros se basaban en su conservadurismo incommovible en todos los demás, y era inevitable que esto infiltrara sus visiones ideológicas y moderase los impulsos innovadores en materia escolar. Es por eso muy significativo que los grupos con los que deseaba “reconciliarse” el Estado mediante la renovación de los programas para la instrucción básica, se hayan hecho cómplices de la ilusión de cambios profundos y contribuido así a forjar el mito de una reconstrucción de lo imaginado en los libros de texto.

De ahí que los manuales de 1992, barómetro excelente del clima político en el que nacieron, casi merezcan más atención por las reacciones provocadas que por su contenido. La lectura de cientos de artículos de prensa sobre esta serie de libros o algún otro aspecto de la reforma educativa, unos cuantos publicados en la segunda mitad de julio y la mayoría en agosto y principios de septiembre de ese año, revela atributos de la vida política mexicana en el sexenio, así como la permanencia de rasgos fundamentales del sistema de gobierno desde hace muchos decenios. Esa continuidad no se contradice con el hecho de que en las primeras semanas del debate sobre los nuevos libros, en las que se ven las reacciones más intensas, los críticos tradicionales del texto único, es decir los conservadores que organizaron campañas vigorosas contra las series de los años sesenta y setenta, casi no declaren nada respecto a la nueva versión; más llamativo aún es que lo poco que dicen tienda a ser elogioso, por obra de la nueva constelación de relaciones políticas entre las autoridades y ciertos grupos de interés; sin embargo, pese a que la filiación ideológica de defensores y críticos sea inversa a la del pasado, en el fondo se mantienen vigentes pautas básicas de la relación entre sociedad y Estado que son propias del autoritarismo, en las cuales cabría buscar la clave de su sobrevivencia.

LA Coparmex

Según reporta la prensa del 1 de septiembre, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en calidad de representante del sector privado en el Consejo Nacional Técnico de la Educación (Conaltec), manifiesta beneplácito con reservas mínimas en su breve declaración única,² en la que —a manera de afirmar el patriotismo básico ai que aspiran los empresarios— califica como “gran acierto” el que los textos de 1992 confieran a la historia el lugar que merece, en alusión al restablecimiento de esta materia como disciplina individual, en vez de “ciencias sociales” (que combinaba la historia patria con la universal, la geografía y el civismo) en el sistema de enseñanza por áreas a partir de la reforma de 1974, asociada en el imaginario conservador con grandes males. La declaración añade que los nuevos libros transmiten una interpretación del pasado “más madura y mesurada”, que evita

² Amalia Frías Santillán, “Avance positivo en los nuevos libros de texto: Coparmex”, *Uno más Uno*, 1 de septiembre de 1992, p. 8.

“distinciones condenatorias o glorificadoras exageradas” y se abstiene de difundir “ideas extrañas como antaño”, que es una crítica del presunto sesgo procomunista de los textos publicados en el sexenio de Echeverría, bajo el supuesto –reminiscente de la mentalidad de guerra fría– de que no existe en México una tradición intelectual de izquierda con raíces locales, sino que toda idea emparentada –en forma real o ficticia– con el pensamiento socialista por definición proviene del exterior y entra en conflicto con las tradiciones mexicanas.

Es sintomático el hecho de que la serie de 1992 recuperase la portada de la primera versión (la patria representada por una mujer morena), y no se limita a este símbolo el deseo de regresar a épocas de estabilidad como la de López Mateos, porque los libros de Salinas, al restablecer la enseñanza de la historia mexicana como disciplina separada, probablemente no tenían tanto un propósito pedagógico como el de reprimir los recuerdos de Echeverría para obsequiar a la derecha. En cambio, es muy discutible que hayan variado la parte central de la interpretación de la historia mexicana y el catecismo cívico. Eso importa poco en el debate, donde las opiniones emitidas no guardan relación con la sustancia de los programas educativos, sino que predomina un juego de alianzas y complicidades que se fingen secretas y ordenan a los representantes patronales reaccionar como imaginen que pudo esperar el Estado cuando se propuso adivinar lo que podría complacerlos. Por lo visto hubo acierto mutuo o, en el peor de los casos, reconocimiento de intenciones que bastó para asegurar la simpatía recíproca.

Los empresarios elogian también la presentación de los manuales de 1992, lo cual no compromete a mucho, y no objetan el que los dos tomos traten los mismos puntos, porque lo hacen “con diferente amplitud y profundidad”. No fue planeado sino accidental que uno de los libros derivase del otro: las autoridades educativas habían encomendado dos volúmenes, pero como no se concluyó a tiempo el destinado a cuarto grado, para sustituirlo hubo que improvisar un texto a toda prisa por medio de resumir el que sí estaba listo (para quinto y sexto año), que de suyo era breve y francamente superficial. Pero lejos de encontrar defecto en este procedimiento y su resultado, los empresarios optaron, para no dañar sus buenas relaciones con el gobierno, por manifestar que veían en los nuevos libros de historia un “avance positivo”; confirmaban, de esta manera, que el contexto político y las redes de alianzas del momento son lo que determina la pauta del debate educativo, lo mismo en 1992 que en 1975 y 1960.

No obstante, un pudor elemental lleva a la Coparmex a matizar sus elogios sin precedente, cuando afirma que “la falta de profundidad en

algunos temas [no especificados] puede ocasionar que nuevamente se caiga en una interpretación oficialista”, aseveración que repudia cualquier ideología gubernamental: se expresa así el apego, aunque sea reflejo, a rancios preceptos que condenan por principio la labor educativa del Estado mexicano, en la que ven expresiones de “totalitarismo”, porque supuestamente viola la esfera de la conciencia individual. Esos postulados tampoco reconocen legitimidad a la voluntad estatal de dar forma a la nación y de forjar la cultura mexicana, pues consideran que ambas existen de suyo y pueden sobrevivir con fuerza propia, o tal vez con el vigor que les comuniquen otros agentes culturales. Eso demuestra los límites de la alianza entre las élites económica y política, tan estrecha en el sexenio de Salinas que había más razones que de costumbre para confundirlas, por lo menos en términos sociológicos. Queda confirmado, a la vez, que los estratos ricos se reservan la posibilidad de chantajear al Estado mediante la amenaza de sabotear con sus recursos cualquier estrategia económica que proponga. Este fenómeno es universal, pero más marcado en sistemas como el de México, donde los privilegiados libran la lucha por el poder en las más altas esferas, de las que están excluidos el grueso de los ciudadanos por falta de mecanismos eficaces de representación.

Sin embargo, lo que deja la impresión más durable, al leer el manifiesto de la Coparmex, es el hecho de que los empresarios aceptaran ver en los libros grandes cambios de interpretación histórica donde no los había. Esto habla –pese a que los representantes de los patrones se reservaron posibilidades de recuperar sus sagrados principios e interrumpir el idilio con el poder público si fuese nuevamente necesario– de una actitud servil frente al Estado, como para agradecerle promesas –implícitas en el conservadurismo abierto del gobierno en ese tiempo– casi más que beneficios materiales: la distribución de estos últimos entre las capas superiores fue de hecho tan desigual que alteró el equilibrio entre ellas, y no pocas resultaron destronadas. Otra conclusión posible es que Salinas consiguió su propósito esencial de restaurar, aunque fuera superficialmente (y sin menoscabo de una pauta ya muy establecida de variación marcada del poder presidencial a lo largo de un sexenio), el prestigio del Ejecutivo y del sistema político en su conjunto, cuyos mecanismos de control se fortalecieron para llevar a la práctica las reformas de la economía sin el obstáculo de expresiones de descontento. Cabe imaginar que el gobierno contara, para ese fin, con la complicidad de por lo menos una parte de los empresarios, presumiblemente la que más se favorecía de cambios en las reglas económicas o la que, a falta de ganancias tangibles, encontraba consuelo en

el clima ideológico que procuraban inducir las autoridades con su discurso novedoso en la materia.

Eclos del nuevo credo alaban en los libros el estrechamiento de vínculos comerciales con Estados Unidos luego de dismantelar en México el proteccionismo, lo cual tuvo efectos sin duda lesivos para la masa de pequeñas y medianas industrias –quizá mal representadas en la Coparmex– y seguramente despertó en ellas el más natural resentimiento. Es posible, en cambio, que la oferta de disminuir el gasto público, al que atribuyen los libros todas las penurias materiales del país (sin argumentarlo y con poca consideración por la capacidad intelectual de escolares de primaria), haya brindado a un mayor número de empresarios satisfacción ideológica –porque ese acto de contrición gratuito del gobierno significaba apego a la ortodoxia que dictaba combatir la injerencia estatal en la economía– a manera de compensación. Quizá ésta pesara más que intereses concretos y confirmara así la importancia de lo imaginario en nuestra sociedad, donde las fantasías respecto a la forma en que los programas educativos representan la vida nacional sirve de pretexto inmejorable para incendiar pasiones en nombre de supuestos ideales. Pero tengan base o no estas conjeturas, hay motivos para postular, cuando menos, que el autoritarismo político y el liberalismo económico se complementan muy bien en el sistema mexicano, lejos de contradecirse.

LAS ESCUELAS PRIVADAS

Se detectaron declaraciones de un representante de grupos privados con intereses en la educación, las del presidente de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, que reportan dos periódicos. Según uno de ellos,³ el señor Manuel Arroyavet dijo que los libros nuevos son “superiores en conocimiento”, pero advirtió que podría utilizarlos mal un magisterio “altamente politizado” y ofreció que su organización velaría por evitarlo, quizá más por hostilidad contra cualquier sindicalismo –y el que representa el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es de los más criticables– que por alguna convicción; en cambio, otro diario de la misma fecha⁴ atribuye a esta persona críticas a

³ Norma Angélica Cuéllar, “Obligados los profesores a una mayor capacitación”, *El Heraldo*, 6 de agosto de 1992, p. 4.

⁴ Javier Rodríguez Lozano, “Opiniones encontradas sobre el libro de historia para primaria”, *El Universal*, 6 de agosto de 1992, p. 26.

la forma en que los manuales tratan la represión de 1968 y las modificaciones recientes de la Constitución. Empero, cuatro días después, el segundo periódico⁵ cita alabanzas de Arroyavet a la presentación de los libros y críticas del contenido sumamente moderadas en comparación con las de las escuelas privadas (casi todas muy conservadoras) que se pronunciaron en polémicas anteriores: que “es un bien y una falla” el hecho de que cada tomo abarque toda la historia nacional, que convendría “conectar la historia con el civismo”, y que en los textos todavía hay afirmaciones (no especificadas) que “llevan al error histórico”.

Estos comentarios superficiales parecerían poner en evidencia, como en el caso de la Coparmex, remanentes del impulso característico del sector privado mexicano en conjunto –sin desconocer variantes, porque no es bloque homogéneo– de criticar el libro de texto gratuito, pero muy atemperados en el sexenio de Salinas por el interés en agradecerle lo que los estratos altos veían como concesiones (quizá más simbólicas que materiales en muchos casos), si bien esta gratitud tenía los límites que dictaba la conveniencia de no dejar ver demasiado el acercamiento al gobierno, por razones de estrategia y de doctrina. Más que por su interés intrínseco casi nulo, la declaración del representante de las escuelas particulares merece destacarse en cuanto ilustra la uniformidad de posiciones entre los grupos identificables como derechistas. Como es dudoso que esto se debiera a esfuerzos de coordinación deliberados, sirve para confirmar la permanencia de los valores que por largo tiempo han dividido a las familias políticas en México. Se comprueba, a la vez, el éxito del régimen de Salinas en su esfuerzo por obtener apoyos –aunque fueran efímeros y en buena medida artificiosos– de grupos escogidos por medio de coquetearles con promesas, y nuevamente llama la atención el entusiasmo con el que reciben estos regalos ideológicos los cortejados, quienes para corresponderlos alimentan la quimera de una cordialidad recuperada por obra de supuestos cambios en la forma en que los libros de texto presuntamente imaginan la experiencia nacional.

LA IGLESIA CATÓLICA

En forma paralela, la Iglesia católica –otro viejo enemigo de los libros y el más poderoso, por ser el más motivado en cuanto que competidor

⁵ Javier Rodríguez Lozano, “Propone la CNEP editar también el libro de geografía de México”, *El Universal*, 10 de agosto de 1992, p. 5.

principal del poder público en la lucha para conquistar las almas de los mexicanos— esta vez llama la atención por su silencio, que no es difícil de entender en el contexto de su luna de miel con el gobierno de Salinas, sobre todo a partir de que éste reconoció la personalidad jurídica de las iglesias y restableció relaciones diplomáticas con el Vaticano. Un periodista⁶ reporta que, al llamarles por teléfono para entrevistarlos, el arzobispo de Guadalajara y el de Hermosillo, el obispo de Cuernavaca y el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano dijeron no conocer los contenidos de los nuevos textos escolares; como es difícil creerlo, el ataque de amnesia tiene visos de mentira diplomática para no hablar del tema. El último de los prelados tan discretos, Godínez Flores, probablemente presionado por el reportero, se limitó a formular una propuesta poco intelectual, que la historia “[...] a veces se conoce mejor por los periódicos que por los libros”, luego insistió en que no podía dar opinión acertada sobre los manuales recientes.

Sin embargo, unos días después el obispo de Tuxtla Gutiérrez, Felipe Aguirre Franco, declara en tono vigoroso, reminiscente de la agresividad de buena parte del alto clero en los debates educativos anteriores, que el libro nuevo⁷ se escribió “[...] con fuertes dosis de adrenalina que amenazan con despertar odios y rencores del pasado”, luego anuncia —quién sabe si a título personal o como vocero oficial de la Iglesia— que la Comisión de Educación del Episcopado Mexicano hará propuestas para reformar ese libro “[...] incompleto, mutilado y abiertamente antirreligioso”, que presenta a la Iglesia católica “[...] como institución oscurantista, enemiga del progreso y por siempre del lado de los poderosos” —que fueron los motivos del supuesto agravio de los católicos a raíz de las reformas educativas previas— de un modo que contradice la reconciliación del Estado mexicano con las iglesias.⁸

En su momento habría sido muy difícil establecer si el obispo Aguirre Franco emitió esa nota discordante por distracción o instinto, o por representar una corriente de opinión dentro de la Iglesia que se apegaba a una tradición combativa en materia de educación, en vez de respetar el diplomático silencio que practicaban, en su gran mayoría, las altas autoridades eclesiásticas para no poner en riesgo la cordialidad recuperada en los nexos con el Estado. La duda aumenta porque

⁶ Santiago Jiménez Cardona, “Sano que los libros de texto reflejen la realidad histórica”, *Ovaciones*, 27 de agosto de 1992, p. 3.

⁷ No especifica cuál de los dos, pero uno fue adaptación del otro.

⁸ Wilbert Torre, “Propondrá la Iglesia cambios al libro de texto por incompleto y mutilado”, *El Universal*, 3 de septiembre de 1992, p. 19.

el anuncio de este obispo de futuras propuestas respecto a los programas escolares coincidió con una declaración de la Comisión Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano,⁹ según la cual el texto de la Ley Reglamentaria sobre Asociaciones Religiosas y Culto Público “[...] no es claro, tiene incongruencias y rezagos de expresiones de recelo” y además coarta “[...] la libertad de expresión y [la de] educación”. Sin aludir a la reforma educativa directamente, este comentario pone en evidencia ya sea residuos de rencor o una estrategia inercial de quejas permanentes en espera de concesiones adicionales, que a su vez revelaría conflictos latentes —aunque menores, si se consideran antecedentes de antagonismo extremo— en la relación entre el Estado y facciones de la Iglesia católica.

Es ciertamente posible que parte del clero conservara fuertes impulsos belicosos, pero en la práctica las raras expresiones de hostilidad abierta contra los libros no fueron preámbulo de una campaña articulada de gran alcance como las que hubo contra las reformas educativas anteriores, y el rasgo dominante de los jerarcas católicos en los primeros momentos del debate en 1992, por definición los más agitados, fue una discreción difícil de creer, comparada con actitudes tradicionales de esos ministros. El contraste es más notable aún si se considera que los libros en cuestión, a pesar de la voluntad más acentuada que antes de reconocer el guadalupanismo como factor coadyuvante a la consolidación de la identidad nacional, no modificaron en nada las tesis tradicionales de la historia oficial —presentes en las versiones anteriores de los libros de texto— respecto al papel poco edificante de las altas jerarquías eclesiásticas a lo largo de los siglos. Han desaparecido incluso las distinciones, que proponían los antiguos manuales, entre conquistadores crueles y evangelizadores bondadosos (pp. 42-43). La Iglesia católica, al igual que el ejército, parecería seguir excluida de la vida pública en castigo por su papel en otros tiempos: lejos de desplegar benevolencia, los textos de 1992 repiten la reseña tradicional de la lucha del clero por defender sus privilegios a lo largo del siglo XIX (pp. 73, 77, 84, 94); añaden estos manuales que la intransigencia de los obispos desató la serie de acontecimientos que desembocaron en la guerra cristera (p. 130). Pero detalles como éstos, que en el pasado tanto disgustaban a los ministros católicos, en 1992 casi no son motivo de queja, pues en tanto los empresarios aceptaron —por razones políticas de con-

⁹ Rosa Isela Rodríguez, “Incongruencias en el texto de la Ley del Culto: el Episcopado”, *La Afición*, 3 de septiembre de 1992, p. 3.

veniencia inmediata— descubrir en los libros cambios inexistentes, el clero prefirió no ver, por motivos semejantes a los de la clase patronal, la continuidad de tesis poco amables que le conciernen, reiteradas por enésima vez en los programas educativos.

Esa ceguera elegida confirma, también en este caso, la prelación de los intereses políticos del momento sobre las consideraciones educativas e incluso, en parte, las ideológicas, por obra de un oportunismo tanto más llamativo cuanto la Iglesia católica es en México la única fuerza que puede aspirar a competir con el Estado en el terreno de la educación, ya que la distinguen su poder de convocatoria excepcional y un aparato ideológico bastante sólido para servir de base a un proyecto de nación alternativo, en el que la religión sería componente primordial de la identidad mexicana. Más aún, se comprobó la capacidad de las más altas autoridades eclesiásticas para mantener la disciplina del rebaño —así fuera por medio de sofocar diferencias internas de opinión— y asegurar la complicidad con un gobierno que aplicó medidas económicas extremadamente onerosas para la mayor parte de una población ya empobrecida. Eso demuestra la eficacia del autoritarismo natural de la Iglesia, que le facilita relaciones fluidas con el Estado no menos autoritario al que se asemeja, pero en cambio la descalifica para hablar —y no se diga actuar— en favor de la democracia. Empero, lamentarlo estaría fuera de lugar, porque no parece fácil ni deseable que una iglesia supla la carencia de partidos políticos creíbles.

OTRAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS Y SIMILARES

Otras iglesias, organizaciones equiparables y “sectas” —como insiste en llamarlas el clero católico— apenas tienen presencia en los periódicos analizados, probablemente menos por recato que por debilidad. Según una nota periodística que no da detalles,¹⁰ el Foro Nacional Evangélico de Iglesias Cristianas y el Consejo Nacional del Rito Mexicano (masón) estuvieron de acuerdo en que los libros “reflejan la nueva realidad de nuestro país”, aunque podrían alejarse todavía más del “oficialismo”, concepto no definido en el que está implícita la voluntad de establecer distancia entre la sociedad y el gobierno. Coincidieron también esas agrupaciones en criticar a la Iglesia católica por no adoptar posición clara frente a los libros (que fue, en efecto, su estrategia), re-

¹⁰ “Propone la SEP debate plural”, *Ovaciones*, 28 de agosto de 1992, p. 1.

nuencia que describieron como “cerrar los ojos para no encontrarse con un pasado negro”.

Así pues, las declaraciones de los rivales del catolicismo a raíz de la reforma educativa de 1992 les dan sobre todo ocasión para recordar que existen, ofrecer al gobierno una diplomática muestra de apoyo que no pueda hacer daño, buscar en la historia alguna base para fortalecer su propia legitimidad y criticar –en nombre de la experiencia nacional– a la iglesia que aspira a retener predominio, con la esperanza de seguir ganándole terreno en la lucha por redimir al pueblo. También en estos empeños los textos para la instrucción primaria se olvidan completamente, como para confirmar que en nuestro país el debate sobre la educación sirve para que afloren todos los antagonismos políticos y culturales imaginables y se libren batallas de cualquier tipo, salvo la propiamente educativa.

LA UNPF

Las sorpresas por el contraste con el pasado continúan al examinar la posición que adopta ahora la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), organismo que por largo tiempo ha sido vocero informal de la Iglesia católica o, en todo caso, del núcleo más recalcitrante del conservadurismo de inspiración clerical. Su presidente, Francisco González de la Garza, se deshace en elogios de los libros de 1992 cuando declara¹¹ que éstos “[...] ya no son campo de opinión de sectarios”, sino que trazan una “[...] panorámica armoniosa” [de la historia]. Se les podría llamar la verdadera historia de México, ya que se ha eliminado la versión maniquea de la época del presidente Echeverría”; sólo quedaría el problema de que los maestros están “mal capacitados” para exponer el contenido de los manuales. Independientemente de que la lectura más superficial de los libros refutaría la idea de “panorámica armoniosa”, porque el énfasis de la nueva versión en el conflicto a lo largo de la historia es por lo menos tan grande como en las anteriores, y de que la expresión “verdadera historia” denota autoritarismo profundo como el del Estado, lo sobresaliente en la declaración es la hostilidad manifiesta contra Echeverría, que comprueba la capacidad de este personaje para servir como factor de cohesión a los grupos conservadores; tendría un

¹¹ Antonio Ortega, “Fin a la tendencia de control político en los libros de texto”, *Excelsior*, 8 de agosto de 1992, p. 15.

papel semejante la antipatía contra los maestros de las escuelas públicas, debida quizá menos a su bajo nivel de competencia profesional que al hecho de simbolizar la intervención del Estado en la educación.

En una entrevista posterior,¹² González de la Garza expone con más detalle los motivos de su entusiasmo y lo matiza. Dice que los libros nuevos “[...] son mejores que los que teníamos antes”, entre otras razones porque imparten otra vez –al igual que en los buenos tiempos de López Mateos– la historia como materia individual (el líder no justifica esta toma de posición); en eso podría verse otra prueba de odio contra Echeverría, casi más que de amor por Salinas. El dirigente de la UNPF celebra también que en esos libros ni héroes ni épocas tengan “valores artificiales” (no especificados) y que su crónica histórica se extiende hasta nuestros días, sin que el gobierno se avergüence de relatar episodios antes omitidos, como la represión de 1968, porque esas narraciones serían una penitencia muy apropiada, a juicio de quienes se erigen en conciencia moral de la sociedad. El líder de la UNPF festeja, finalmente, que los manuales nuevos traten el guadalupanismo, pero “[...] faltó cierta claridad al hacerlo”, añade De la Garza sin explicar por qué, lo cual demuestra que no hay manera de complacer totalmente a la derecha de corte religioso. El declarante concluye que, aunque los libros no sean definitivos, a partir de ellos “[...] podemos empezar a construir la verdadera historia de México”, que sería una manera orgullosa de ofrecer al gobierno colaboración en materia educativa para agradecerle sus galanterías.

Las promesas de complicidad no conllevan reconocimiento del liderazgo estatal en materia educativa, sino oferta de diálogo en pie de igualdad en el mejor de los casos, porque la UNPF insiste en saber más que los historiadores encargados de escribir los manuales; de ahí que esa organización prometa entregar a la SEP una lista de “precisiones de contenido”. Aun así, el hecho fundamental es que un grupo de presión muy visible, en otros tiempos, por la ferocidad de su militancia contra el Estado, de pronto se convierte en su aliado entusiasta. Ya sea que esto se deba a una convergencia espontánea de convicciones ideológicas o a complicidades tácitas para simular que la hubo (lo segundo es más probable, porque en política suele predominar el pragmatismo sobre los principios, además de que las innovaciones en los libros no son bastante hondas para significar una reorientación radical que justifica-

¹² Juan Arvizu Arrijoja, “Ni definitivos ni intocables, los nuevos textos para primaria: UNPF”, *El Universal*, 1 de septiembre de 1992, p. 22.

ra el entusiasmo de quienes aceptan creer en ella), lo único indudable es la capacidad extraordinaria del régimen para cooptar, aunque no siempre sobre bases durables, una oposición que desborda gratitud y pone su ideario en segundo plano cuando intuye el deseo gubernamental de complacerla.

EL PAN

Siguen las sorpresas cuando pasa la discusión al ámbito de los legisladores: el hecho de que esto ocurra es, en sí mismo, la mayor de las novedades, que se explicaría por la voluntad presidencial de dar alientos al debate legislativo para fortalecer la democracia embrionaria. Es reveladora, en particular, la actitud del Partido Acción Nacional (PAN), que oscila entre el silencio y la crítica moderada, pero no vacila en ofrecer apoyo abierto a la reforma educativa en los momentos más tensos de la polémica. Esto es signo de un tiempo en que al menos parte de la plana mayor del PAN, por tradición partido de oposición leal, tal vez a espaldas de sus propias bases entabló con el PRI una alianza franca en reacción contra la fuerza inusitada que exhibió la izquierda en las elecciones de 1988, pues enfrentar este peligro, que era interés compartido con el gobierno, justificaba correr el riesgo de autoinmolarse como partido de oposición. Dicho de otro modo, sin abandonar por completo sus demandas tradicionales de libertad de enseñanza ni su repudio histórico de lo que consideran "imposiciones" de las autoridades educativas, en 1992 varios panistas renombrados ofrecen al gobierno apoyo franco, pero con fluctuaciones que reflejan la contradicción entre el apego a preceptos doctrinarios (que solían dotar al partido de identidad) y el impulso pragmático de entablar alianzas tácticas (que dicta la conveniencia inmediata).

Es muy significativo que los panistas se abstengan de participar en una reunión de legisladores —donde los representantes de partidos izquierdistas formulan críticas muy fuertes—¹³ con Ernesto Zedillo, en ese tiempo secretario de Educación, a manera de confirmar que el verdadero enemigo del PAN es la izquierda cada vez que da señales de vida, no el PRI. Continúa esta actitud de apoyo en el primero de dos lar-

¹³ Gabriela Ortega R., "Perfectibles, los libros de texto: Zedillo", *El Nacional*, 26 de agosto de 1992, p. 4; Jesús Sánchez, "Los libros de texto no pretenden manipular, asegura Zedillo", *El Financiero*, 26 de agosto de 1992, p. 43.

gos debates en la Comisión Permanente del Congreso, donde los panistas elogian sin pudor “[...] el esfuerzo extraordinario de la SEP”¹⁴ y el contenido medular de los libros recientes,¹⁵ pero a pesar de eso manifiestan reservas de principio frente a toda historia oficial, porque la escriben “sólo los vencedores”,¹⁶ y reiteran sus demandas de libertad de enseñanza,¹⁷ en especial la de modificar el artículo 3 de la Constitución para que sea posible el juicio de amparo contra el Estado en materia de educación;¹⁸ también esto denota las tensiones entre la vieja doctrina y el oportunismo que dicta reprimirla para acercarse al gobierno cuando convenga. Poco después, en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal los panistas reiteran sus elogios a la “objetividad” y “claridad” de los nuevos libros,¹⁹ si bien rechazan, como para asentar un principio irrenunciable, que la SEP los imponga unilateralmente, esta vez los critican en forma moderada por “[...] justificar los errores del sistema”,²⁰ sobre todo por “absolver” a López Portillo,²¹ y secundan la demanda de los legisladores de izquierda de investigar el uso de recursos federales destinados a la edición e impresión de los volúmenes,²² con lo cual la preocupación por el dinero supera, aunque sea por breve lapso, las barreras ideológicas. En contraste, al poco tiempo²³ hay un despliegue de críticas del PAN, motivado quizá por el

¹⁴ Lourdes Galaz, “Rechaza el PRI llamar a Zedillo al Congreso”, *Excélsior*, 27 de agosto de 1992, p. 4.

¹⁵ Jorge Octavio Ochoa, “Niega el PRI ante la Permanente que los libros de texto gratuitos sean tendenciosos”, *Uno más Uno*, 27 de agosto de 1992, p. 3.

¹⁶ Jesús Sánchez, “Condenan en la cámara la parcialidad de los libros de texto”, *El Financiero*, 27 de agosto de 1992, p. 42.

¹⁷ Víctor Manuel Cázares, “Neoliberalismo y revolución en los libros de historia: PPS”, *Punto*, 30 de agosto de 1992, p. 18.

¹⁸ Galaz, *art. cit.*

¹⁹ Galaz, *art. cit.*

²⁰ Alonso Urrutia, “Cuestionan cuatro partidos los nuevos libros de historia”, *La Jornada*, 28 de agosto de 1992, p. 17.

²¹ Lorenzo Delfín Ruiz, “Demandan asambleístas de PPS y PRD la reelaboración de los textos gratuitos”, *El Día*, 28 de agosto de 1992, p. 3.

²² Jorge Camargo Zurita, “Investigar si hubo dispendio al elaborar textos, piden tres partidos”, *El Universal*, 28 de agosto de 1992, p. 21; Lucía Luna Herrera, “Verdad a medias en los libros”, *Ovaciones*, 28 de agosto de 1992, p. 5.

²³ Jorge Camargo Zurita, “Pide el PAN la autorización para utilizar libros complementarios”, *El Universal*, 1 de septiembre de 1992, p. 22; Alberto Rocha, “Elaborar textos complementarios de historia para 4°, 5° y 6° grados: PAN”, *Excélsior*, 1 de septiembre de 1992, p. 4; Raúl Hernández Arcos, “Evidente monopolio de la educación en México: PAN”, *Novedades*, 1 de septiembre de 1992, p. 9.

surgir de diferencias entre panistas o por algún temor repentino de sus líderes a mostrarse demasiado complacientes: de pronto, ese partido reclama permiso para usar textos complementarios que contrarresten deficiencias súbitamente advertidas en los libros oficiales, porque éstos siguen presentando una visión de la historia “[...] parcial, partidista, gobiernista [sic] y tendenciosa” que viola derechos naturales de los padres de familia, tema clásico del discurso derechista contra la educación pública.

Sin embargo, un nuevo giro de actitud del PAN, que es un indicio más de oportunismo, tiene lugar a raíz del llamado del senador Porfirio Muñoz Ledo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a organizar un boicot contra los manuales hasta que los elaboren “verdaderos educadores”. Pese a que también la derecha cuestionó la capacidad profesional de los autores de los textos, frente a la petición de la izquierda los panistas retoman la defensa de esos libros –pero con más fervor que antes– en el segundo debate en la Comisión Permanente. De este modo la alianza entre el PAN y el PRI, aunque no tenga fundamentos durables, repunta cada vez que parece revivir el enemigo común. Queda en claro que ese pacto informal (a diferencia de coaliciones legítimas en sistemas realmente democráticos) no produce a nadie sonrojos, y que el cinismo absoluto obedece a la intrascendencia de los principios doctrinarios: quizá fuera esto una causa de la debilidad del sistema de partidos, que a su vez explicaría las imperfecciones de la democracia mexicana.

En esa última reunión, contra lo que podría esperarse,²⁴ la política supera al surrealismo cuando el PAN suple a los priístas²⁵ –que permanecen silenciosos–²⁶ al hacer la apología de los programas escolares, en lo que termina por ser un diálogo de sordos, aunque rico en complicidades secretas para volverlo mutuamente redituable, entre Muñoz Ledo y el panista Diego Fernández de Cevallos (quien fue luego candidato a la presidencia). El segundo no vacila en respaldar los libros con base en apropiárselos como proyecto de su partido, cuando dice que la reforma “auténticamente educativa” de Salinas está encaminándose

²⁴ Ángel Granados Velasco, “Contra toda predicción, el PAN, en lugar del PRI, defendió los libros de historia”, *El Día*, 3 de septiembre de 1992, p. 3.

²⁵ Daniel Moreno, “En los nuevos libros se confunde historia con propaganda: Muñoz Ledo”, *El Economista*, 3 de septiembre, p. 38.

²⁶ Manuel Moreno y Jesús Sánchez, “Corta vida a los libros gratuitos de historia, auguran pedagogos; Fernández de Cevallos (PAN) los defiende”, *El Financiero*, 3 de septiembre de 1992, p. 22.

“[...] por senderos que nosotros hemos señalado”,²⁷ y una prueba es que los manuales no son ya maniqueístas y han dejado de imponer la educación socialista,²⁸ además de que han perdido “el miedo a la historia”:²⁹ poco importa no ofrecer argumentos razonados al apelar a prejuicios, porque nada es más fecundo en política que la fantasía cuando el objeto de un debate son construcciones imaginarias como las que ofrecen los libros de texto. Tal vez sea la gratitud por una frase explícitamente anticomunista de los manuales (p. 149) lo que vuelve a un panista distinguido más priísta que el PRI y le hace proferir esas alabanzas desmesuradas, que sólo moderan las críticas breves de un correligionario,³⁰ quien para salvar la honra de su partido declara que la educación pública, a pesar de algunos cambios, no se ha desvinculado del presidencialismo propio del sistema mexicano. Empero, el oportunismo del PAN y la aseveración expresa de sus cuadros superiores de que coinciden con el gobierno en algo tan cargado de significados como la versión oficial de la historia mexicana, con firmeza comunica la idea de que en el país no existen fuerzas disidentes creíbles.

EL PRD

En el clima político del sexenio de Salinas, cuya exhibición franca de conservadurismo puso a la izquierda a la defensiva, no es de extrañar, dado que la derecha supuestamente ajena al Estado abandonó su papel de enemigo de los libros gratuitos para convertirse en su defensor, que ahora los critiquen políticos izquierdistas. Empero, no está libre de ambivalencia —porque dota de credibilidad las ilusiones reformistas contrarrevolucionarias del gobierno en cuestión— la protesta que encabeza el PRD, fortalecido aún por el recuerdo de su buen desempeño electoral cuatro años antes. Sus declaraciones proliferan en la prensa hacia la tercera semana de agosto.³¹ Respecto a procedimientos, ese

²⁷ Roberto Zamarripa, “Analizarán comisiones de educación del Congreso los libros de historia”, *La Jornada*, 3 de septiembre de 1992, p. 3.

²⁸ Jesús Sánchez, “Entre el silencio priísta, el PAN defiende los nuevos textos”, *El Financiero*, 3 de septiembre de 1992, p. 34.

²⁹ Gabriela Ortega, “Férrea defensa del PAN a los libros de historia”, *El Nacional*, 3 de septiembre de 1992, p. 13.

³⁰ Roberto Cuevas Paralizábal, “A juicio los libros de textos ante congresistas”, *Ovaciones*, 3 de septiembre de 1992, p. 8.

³¹ Jorge Camargo Zurita, “Manipula políticamente a los niños el texto de historia: PRD”, *El Universal*, 12 de agosto de 1992, p. 25; Óscar Sánchez Márquez, “Distorsionan la

partido lamenta que los libros se hayan escrito “en dos meses” y sin consultar al Conalste (los reproches por no participar solían provenir de la derecha); deplora, además, que no hubiera concurso para asignar la impresión de los manuales, que por “razones oscuras” se confió a empresas privadas en lugar de los Talleres Gráficos de la Nación (cabe suponer que el motivo del malestar fueran las grandes ganancias pecuniarias de esas compañías favorecidas, no el problema educativo). En cuanto a los aspectos pedagógicos, el PRD lamenta que los libros quieran “reimplantar la memorización” y que sus contenidos estén “demasiado seccionados”, y juzga que fueron insuficientes los cursos de ocho días para adiestrar a los maestros en su uso.

La crítica central, sin embargo, se refiere al presunto contenido de los volúmenes, que según el PRD manipulan políticamente a los niños al ofrecerles una visión poco objetiva del pasado, intentan legitimar el poder presidencial excesivo y la permanencia del PRI en el poder, procuran adecuar la historia “a las intenciones del actual régimen”, y por ende se vuelven instrumento de una justificación sexenal que trata de ocultar los grandes problemas nacionales y los riesgos de la estrategia económica de Salinas. En opinión del PRD, la reseña de los últimos decenios se empeña en “exculpar” a los gobiernos de sus errores y en ocultar la existencia de organizaciones “independientes” (es decir de izquierda); la crónica de la represión de 1968 es parcial y la minimiza, y es deplorable también que se “convalidan las elecciones de 1988”. Los puntos de la crónica histórica más objetables incluyen la caracterización demasiado benigna de los conservadores de 1824, el hecho de presentar la anexión de Texas a Estados Unidos como si un estado hubiera ganado su independencia, la “superficialidad” de los párrafos respecto a la “guerra de los pasteles” y, sobre todo, la “parcialidad” en el tratamiento del porfiriato. A juicio del PRD, el supuesto intento oficial por reivindicar esa dictadura demostraría mejor que nada la mani-

realidad histórica los nuevos libros de texto gratuitos”, *Ovaciones*, 14 de agosto de 1992, p. 6; Jorge Octavio Ochoa, “Cuestiona el PRD el contenido de los libros de texto”, *Uno más Uno*, 19 de agosto de 1992, p. 5; “Censuran los diputados del PRD el enfoque histórico de los libros de texto”, *Novedades*, 19 de agosto de 1992, p. 7; Esteban Espinosa Montejano, “Rechazan los perredistas el nuevo libro de texto gratuito de historia”, *El Heraldó*, 19 de agosto de 1992, p. 2; “Crítica perredista a los nuevos libros de historia”, *Diario de México*, 19 de agosto de 1992, p. 5; Arturo Zárate Vite, “Fallas y manipulación de la historia en los nuevos libros de texto: PRD”, *El Universal*, 19 de agosto de 1992, p. 25; Ángel Granados Velasco, “Los libros de historia fueron impresos en talleres privados”, *El Día*, 19 de agosto de 1992, p. 6.

pulación de la historia, con miras a legitimar a Salinas e incluso abogar por su reelección.³²

Es verdad que la serie de 1992 vuelve a dar crédito a Porfirio Díaz por luchar contra los invasores europeos y restablecer la paz en el país para hacer posible su recuperación económica. “La negociación de la deuda externa permitió sanear la economía” (p. 97), y la mejoría en las finanzas públicas atrajo inversiones extranjeras, cambió la imagen de México en el exterior e hizo aumentar “[...] la demanda de [sus] recursos naturales”, de lo cual se benefició mucho la cultura (pp. 98-99). Sin embargo, reaparecen alusiones inequívocas al enorme costo social de esas políticas, ilustrado también con imágenes expresivas, tales como el fragmento de un mural de Rivera que muestra la represión de una huelga (p. 104). Dado que el balance entre logros y fallas sigue siendo negativo, no es obvio que haya cambios en el juicio del porfiriato, menos aún en vista de que también las versiones anteriores del libro gratuito le reconocían algunos méritos. Pero ese argumento no habría surtido efecto en una polémica que, como de costumbre, adquirió vida propia y se volvió impermeable a cualquier evidencia objetiva.

En la reunión con Zedillo representantes del PRD amplían sus críticas puntuales,³³ por ejemplo, que la crónica de la lucha por la independencia exalta la figura de Iturbide en detrimento de la de Guerrero (no sería fácil demostrarlo); que se subestima la explotación de los indígenas durante el porfiriato (opinión muy discutible, aunque llamativa por la persistente connotación izquierdista del indigenismo en México); que no se mencionan el Plan de Ayala ni la ley agraria de enero de 1915 (ni muchísimas otras cosas, pero lo interesante es comprobar valores agraristas en la filosofía de la izquierda mexicana); y que los libros degradan a Zapata y Villa frente a Carranza, al calificarlos de “[...] hombres incapaces de gobernar” (en realidad los manuales sólo insinúan

³² Tal vez la izquierda explote un fondo de verdad cuando dice que los nuevos manuales conceden al porfiriato más importancia que los anteriores, a juzgar por el número de páginas que le dedican (de hecho proporcionales a la duración de esta etapa). Sin embargo, el PRD no tendría interés alguno en reconocer signos muy claros de que la antigua tesis oficial respecto a este régimen se mantiene inalterada en la serie de 1992, lo cual demuestra continuidad con viejos preceptos de la ideología del Estado mexicano y la concepción ética subyacente. Se comprueba aquí la necesidad de un análisis comparativo de las tres versiones del libro de texto gratuito.

³³ Manuel Enríquez Osorio, “Exigirán maestros y PRD modificar los libros de texto”, *La Jornada*, 23 de agosto de 1992, p. 8; Rosa Elvira Vargas y Oscar Camacho Guzmán, “Cuestionan diputados el enfoque y contenido de los nuevos libros”, *La Jornada*, 26 de agosto de 1992, p. 3.

que el tercero tuvo ventaja por estar consciente del peso de la influencia estadounidense en la política mexicana, lo cual es verdad a la luz de la evidencia disponible). Además, los legisladores del PRD piden a Zedillo que aplace la distribución de los textos y al término de la reunión anuncian que pedirán juicio político contra él por no haber convocado a concurso público para redactarlos e imprimirlos.³⁴

Poco después, en el primer debate en la Comisión Permanente, el PRD reitera sus críticas con énfasis en dos puntos. El primero es que, para su gusto, los libros “niegan valores” que en el pasado formaron una conciencia patriótica y nacionalista, opinión extraña en boca de izquierdistas si se considera que la piedra angular del nacionalismo oficial presuntamente descartado —es decir la prédica de unidad y respeto por el marco institucional vigente— siempre tuvo claras afinidades con el pensamiento derechista.³⁵ Añade el PRD que ese viraje —quizá menos marcado en los libros que en la intención de Salinas, y cuyas apariencias de novedad se fortalecen con reproches de la izquierda que las vuelven creíbles— tendría el objeto de facilitar una nueva relación con Estados Unidos³⁶ por medio, entre otras cosas, de proponer que Lázaro Cárdenas contó con la comprensión del presidente de Estados Unidos en el conflicto con las compañías petroleras,³⁷ después de la expropiación en 1938 (académicos de izquierda respetables consideran que así fue). El segundo punto consiste en reiterar la petición de que las autoridades expliquen los criterios para seleccionar a los historiadores que redactaron los libros y los talleres que los imprimieron.³⁸ La demanda de investigar gastos federales, que secundan otros partidos más allá de sus convicciones,³⁹ se añade a críticas del PRD respecto a la concepción general y la pedagogía de los libros: que éstos adoptan un enfoque “parcial”, por cuyo efecto “[...] el Estado sustitu-

³⁴ Vargas y Camacho Guzmán, *art. cit.*; Elizabeth González Mendoza, “Propondrá el PRD juicio político contra Zedillo”, *El Día*, 26 de agosto de 1992, p. 12; “Graves fallas en libros de texto: PPS, *Últimas Noticias de Excelsior*, 26 de agosto de 1992, p. 1; Octavio Juárez Pineda, “Demandará el perredismo juicio político a Zedillo”, *Diario de México*, 26 de agosto de 1992, p. 5-A; Esperanza Mazariegos Aguilar, “Juicio político para Zedillo, busca el PRD”, *La Afición*, 26 de agosto de 1992, p. 6.

³⁵ Ángel Granados Velasco, “Ausentes en los libros de texto los valores nacionalistas y de soberanía”, *El Día*, 27 de agosto de 1992, p. 6.

³⁶ Cázares, *art. cit.*; Ochoa, *art. cit.*

³⁷ Manuel Ponce, “Los libros de texto, no se escribieron sobre las rodillas: PRI”, *El Universal*, 27 de agosto de 1992, p. 3.

³⁸ Galaz, *art. cit.*

³⁹ Jorge Camargo, “Investigar si hubo dispensación...”; Luna Herrera, *art. cit.*

ye a la sociedad como sujeto histórico⁴⁰ (idea inusitada, porque suele atribuirse a la izquierda una actitud favorable a la intervención estatal) y que alternan conceptos simplistas con otros demasiado compiejos para los niños.⁴¹

El paso siguiente en la estrategia del PRD consiste en el llamado de Muñoz Ledo a maestros y padres de familia para boicotear los libros –en un acto de presión típico de una sociedad donde son limitados los canales institucionales para dirimir conflictos de manera democrática, y es más débil aún la voluntad de utilizarlos– sobre la base de que los cambios en su contenido, sobrestimados en las declaraciones del legislador, habrían sido resultado de una solicitud expresa del gobierno de Estados Unidos a cambio de su apoyo al Tratado de Libre Comercio.⁴² Muñoz Ledo insiste en esta acusación –que muestra cómo la actitud frente al vecino de México divide a las familias políticas nacionales– en el segundo debate en la Comisión Permanente, donde declara⁴³ que un encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos (no identificado) le confirmó que funcionarios de ese país pidieron a los del nuestro textos escolares depurados de expresiones antiestadunidenses:⁴⁴ en el fondo nunca las ha habido en los libros gratuitos, seguramente porque las autoridades mexicanas desde hace mucho desarrollaron el instinto de evitar fricciones diplomáticas innecesarias. Empero, el senador basa en su conjetura la opinión de que los manuales recientes expresan “una política integracionista, oligárquica, excluyente y totalitaria”;⁴⁵ luego recomienda solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores documentos de agentes diplomáticos extranjeros relativos a los libros.⁴⁶

Esta recuperación de tradiciones antiyanquis, en buena medida ficticias, corona los empeños por rescatar la variante izquierdista ilusoria del viejo nacionalismo –cuyos temas de intervención estatal para fines de justicia se entrelazaban, paradójicamente, con principios típi-

⁴⁰ Alonso Urrutia, “Cuestionan cuatro partidos los nuevos libros de historia”, *La Jornada*, 28 de agosto de 1992, p. 17.

⁴¹ Raúl Hernández Arcos, “Rechaza la oposición el contenido de los libros de texto de historia”, *Novedades*, 28 de agosto de 1992, p. 12.

⁴² Manuel Ponce, “Boicotear los libros de texto, propone Muñoz Ledo a maestros y a paterfamilias”, *El Universal*, 1 de septiembre de 1992, p. 22; “Llama Muñoz Ledo a los maestros a boicotear los libros de historia”, *Diario de México*, 1 de septiembre de 1992, p. 5.

⁴³ Jesús Sánchez, “Entre el silencio priísta...”, *art. cit.*

⁴⁴ Zamarripa, “Analizarán comisiones...”, *art. cit.*

⁴⁵ Granados Velasco, “Contra toda predicción...”, *art. cit.*

⁴⁶ Cuevas Paralizábal, “A juicio los libros...”, *art. cit.*

cos de idearios derechistas— que en el pasado enarbolaba el gobierno, o lo aparentaba cuando menos, con algún efecto legitimador ante ciertos grupos. Tal vez por eso el presidente Echeverría e incluso otros después de él simularon retomarla en un discurso que sonaba cada vez más hueco, a medida que se apartaba de la práctica. Es tanto más significativo que en 1992 la izquierda colabore con un engaño, al fomentar la ilusión de que todavía en los años sesenta y setenta era genuino el compromiso del Estado con una ideología “revolucionaria”. Dicho de otro modo, para contribuir a la construcción de ese pasado mítico que permitirá sugerir un contraste también artificioso con el presente, la izquierda explota símbolos y sentimentalismos que faciliten el doble encubrimiento, sin que parezcan preocuparle mucho la suerte de la educación pública y el alcance real de los libros, que acusa de “traicionar” el espíritu del proyecto educativo original del Estado. Si bien ésta podría ser una conceptualización válida de innegables esfuerzos de Salinas por alejarse de parte de la vieja mitología revolucionaria (aunque sin abandonar temas claves ni cierto estilo del discurso que heredó, demasiado arraigados en la práctica y funcionales todavía), al mismo tiempo implica una notable disponibilidad de la izquierda —no pocos de cuyos miembros alguna vez pertenecieron al partido oficial y cobraron algo de su sello distintivo— para suscribir valores que presuntamente descartó el Estado. Con esta actitud, la oposición de ese signo —a primera vista irreductible y contrapuesta a la conservadora, en vías de coopción— desempeña ella también, a su manera, un papel de complicidad peculiar con el gobierno —quien sabe si involuntario o deliberado— en cuanto proporciona crédito a los dos mitos citados, el “radicalismo” pseudo-izquierdizante de otros tiempos en el credo gubernamental y la “profundidad” de la reforma salmista. Tal vez se compruebe así una regla despiadada de la política, que cualquier medio es válido para llamar la atención, que no existen preceptos sagrados y que a menudo el discurso no debe interesar por lo que dice sino por sus funciones de encubrimiento.

EL PPS

La misión que adopta el Partido Popular Socialista (PPS) en esta polémica consiste en respaldar las críticas del PRD, que en ese momento es el órgano creíble de la izquierda, pero también aporta comentarios originales que podrían ser el “canto del cisne” de un órgano cuyas labores nunca fueron mucho más que decorativas, aunque útiles para

permitirle al PRI presentarse como partido de centro. El PPS de entrada considera⁴⁷ que fue un acierto ratificar la vigencia de los libros de texto gratuitos, aunque deplora que la serie de 1992 haya suprimido mucha información debido a la influencia de la pedagogía estadounidense,⁴⁸ punto no argumentado que reitera el recelo consabido frente a Estados Unidos. Más aún, el PPS apoya con gusto la tesis del PRD, según la cual embajadores no identificados presionaron a la SEP respecto al contenido de los textos;⁴⁹ considera, sin embargo, que el gobierno de Salinas era el más interesado en “desideologizar” la historia por medio de “[...] soslayar aspiraciones de justicia, democracia y soberanía [con miras a forjar] mexicanos productivos, pero sin conciencia de su patria y sin ideología”,⁵⁰ apreciación que ilustra la tendencia ya mencionada de la izquierda a idealizar el pasado revolucionario del gobierno por medio de simular que adopta valores en los que antes fingía creer el régimen. Esa propensión se confirma al declarar, sin base alguna, que los manuales escolares de Salinas “elogian” a Díaz y eso es una “desviación”, término que revela el empeño del PPS, semejante al de su hermano mayor, por volverse garante de la ortodoxia revolucionaria de la que estaría apartándose el Estado.⁵¹

También lamenta el PPS que la presencia de ministros católicos en la elaboración del Plan Nacional para la Educación Básica supuestamente haya roto la tradición pedagógica nacional,⁵² opinión digna de citarse en tanto comprueba el deseo de añadir ingredientes de anticlericalismo al pasado imaginario de la ideología oficial, pero intrascendente si se considera que desde hace mucho se volvió costumbre que, con motivo de una reforma educativa, el gobierno consultara discretamente a la Iglesia católica, de cuyas observaciones no hacían caso inmediatamente las autoridades, pero sí a la larga. Según el PPS, la influencia de esta Iglesia, aunada a la de la iniciativa privada,⁵³ explicaría el hecho de que se haya omitido de los libros toda alusión a la antigua URSS, China y Cuba.⁵⁴ En realidad, los textos a duras penas

⁴⁷ Cázares, *art. cit.*

⁴⁸ Manuel Ponce, “Se busca enterrar el pasado con el nuevo libro de texto: Jorge Tovar”, *El Universal*, 28 de agosto de 1992, p. 21; Cázares, *art. cit.*

⁴⁹ Granados Velasco, “Debate en la Permanente...”, *art. cit.*

⁵⁰ Ponce, “Se busca enterrar...”, *art. cit.*

⁵¹ Alonso Urrutia, *art. cit.*

⁵² Cázares, *art. cit.*

⁵³ Ochoa, *art. cit.*

⁵⁴ Ponce, “Se busca enterrar...”, *art. cit.*

mencionan algún país extranjero (salvo Estados Unidos), porque han descartado la historia universal, si bien es interesante tomar nota de las razones que cita ese partido como prueba del anticomunismo de la nueva versión de textos gratuitos, tan mal escogidas –pues habría otras mucho mejores– que sugieren nulo interés por esos materiales.

Finalmente, el PPS se regodea en críticas de detalle (dice haber detectado 1.25 errores por página en promedio),⁵⁵ en actitud minuciosa que revelaría visceralidad más que rigor. Entre otros puntos, comenta que en los manuales le quitaron el “Don” a Miguel Hidalgo, Juárez figura como “[...] un abogado más entre los hombres de la Reforma”⁵⁶ y “no aparecen” los Niños Héroes. De hecho, los tomos de 1992 sí mencionan a estos últimos, aunque sin identificarlos por sus nombres,⁵⁷ exactamente igual que la versión anterior, circunstancia a la que nadie alude porque no interesa lo que digan o se abstengan de decir los textos frente al valor sentimental de aquellos personajes; se comprueba así, otra vez, la intrascendencia de los libros en cuanto pasa la polémica a un plano de símbolos donde no hacen falta referencias a hechos objetivos, y es válido que cada participante en el debate añada o reste a los manuales lo que le dicte su imaginación, descubra innovaciones donde no las haya y no vea, en cambio, las más sobresalientes. Lo anterior obedece a intereses particulares, que determinan la aportación de fantasías a diálogos que son más bien monólogos y no auguran glorias a la democracia en México.

EL MAGISTERIO

El segundo núcleo importante de críticas de vocación “izquierdista” –si conservara sentido ese término en contextos de pragmatismo y cinismo absolutos, como el mexicano– se origina en el magisterio, aunque la variedad de las mismas ilustra lo heterogéneo del gremio, que se expresa en las divisiones internas del SNTE:⁵⁸ en tanto su líder nacional, Elba Esther Gordillo, convoca a foros de debate, y sus miembros “institucionales” se limitan a emitir opiniones moderadas, otras corrientes rechazan los libros abiertamente y amenazan con no emplear-

⁵⁵ Hernández Arcos, *art. cit.*

⁵⁶ Ponce, “Los libros de texto no se escribieron...”, *art. cit.*

⁵⁷ Camacho Guzmán, *art. cit.*

⁵⁸ Rosa Elvira Vargas, “Los libros de historia para primaria deben tener carácter experimental, considera Nuevo Sindicalismo”, *La Jornada*, 28 de agosto de 1992, p. 17.

los. Gordillo hace esfuerzos de conciliación –o los simula– con miras a establecer un equilibrio y a recuperar control sobre su organización. Quizá aplique una fórmula correcta de sobrevivencia, especialmente apropiada a la lógica del sindicalismo oficial mexicano, que es la de navegar sobre corrientes opuestas para forjar ilusiones de dominio. Parte de ese empeño se dirige a crear aunque sea la apariencia de una voluntad de colaboración con las autoridades, que de hecho podría ser maniobra táctica para encubrir sabotajes subterráneos, pero sin perder la imagen de autonomía del SNTE, objetivo contrario a una expectativa lógica de observadores mal informados: que los maestros de las escuelas oficiales, en tanto que difusores de las normas cívicas del Estado, le ofrecieran lealtad verdadera, como ha sido el caso en otros países con sólidas tradiciones de instrucción pública.

De ahí que en la ceremonia de presentación de los libros Gordillo exprese apoyo⁵⁹ a la edición de textos que “restituyen” a la historia su importancia y se limite a destacar, para no parecer demasiado complaciente, el problema de la baja calidad de la enseñanza.⁶⁰ En contraste, al aumentar la intensidad del debate y el descontento de muchos maestros, en la última semana de agosto la líder parece empujada a emitir críticas moderadas –no por eso menos reveladoras de la ambivalencia de un sindicalismo en principio controlado, pero dispuesto a plantear continuamente la amenaza de subvertirse– contra los manuales, porque “ofrecen un conocimiento superficial”.⁶¹ Las deficiencias se deberían a la premura con que se preparó la nueva versión.⁶² Para superarlas, Gordillo propone⁶³ que los textos se analicen, pues son “perfectibles” y habrán de mejorarse “de manera plural”,⁶⁴ es decir por medio de una amplia consulta que organice el SNTE,⁶⁵ seguida de un debate en toda la sociedad respecto al contenido de la nueva versión, que es una propuesta más fácil de formular que de poner en práctica, aunque no desprovista de eficacia en cuanto conlleva amenazas de movilización con-

⁵⁹ Francisco Cárdenas Cruz, “Pulso político”, *El Universal*, 5 de agosto de 1992, p. 7.

⁶⁰ Félix Báez-Jorge, “Historia de México más allá de la retórica”, *El Nacional*, 7 de agosto de 1992, p. 10.

⁶¹ Irma Pilar Ortiz, “Revisaremos el libro de Historia: el SNTE”, *Excélsior*, 24 de agosto de 1992, p. 4.

⁶² Ortiz, *art. cit.*

⁶³ Elba Esther Gordillo, “Pobres los conocimientos en la educación básica”, *El Día*, 25 de agosto de 1992, p. 2.

⁶⁴ “Transformación educativa en marcha”, *El Universal*, 2 de septiembre de 1992, p. 6.

⁶⁵ Gordillo, *art. cit.*

tra una política gubernamental. Estas actitudes ilustran el esquema mexicano de dominación, que al encuadrar un gremio estratégico en un sindicato oficial lo somete a cierto control a la vez que le confiere posibilidades de practicar resistencia –silenciosa la mayor parte del tiempo y ruidosa en momentos críticos– de acuerdo con una lógica que esclaviza a los dos participantes en la relación de clientelismo, hasta el punto en que se vuelve recíproco el dominio y resulta en parálisis. Empero, de modo congruente con su vocación de moderadora, unos días después Gordillo elogia de nuevo los libros, porque presentan “una historia comprometida con la verdad y no con la promoción de una verdad”.⁶⁶ Luego, cuando confirma la organización de un foro de análisis para “consensar [sic] la posición del magisterio nacional”,⁶⁷ la dirigente insinúa, para respaldar declaraciones de las autoridades, que sí hubo consultas con el SNTE en la elaboración de los manuales.

Dicen otra cosa –en forma unánime, pero con irritación fluctuante– varias corrientes del magisterio, cuya queja común –la falta de oportunidades de participar en la reforma educativa– condensa el descontento por el autoritarismo perdurable del sistema de gobierno, que sin embargo define también la naturaleza de un órgano como el SNTE y determina las modalidades de su actuación en la política mexicana, donde a falta de canales democráticos las organizaciones que encauzan intereses y ejercen presiones son principalmente los grandes sindicatos “controlados”, que mantienen con el Estado una relación de apoyo siempre condicionado, cuya derivación inevitable es el chantaje casi perpetuo. Además, el disgusto de los maestros ejemplifica la tendencia general en México a pedir –quizá para compensar la falta de elecciones democráticas– injerencia en asuntos que, si bien podrían preocupar por razones legítimas a la sociedad entera, en virtud de su naturaleza deberían ser dominio de especialistas. Los miembros del SNTE relativamente moderados⁶⁸ y algunos de sus antiguos líderes⁶⁹ lamentan que siempre se les haya excluido de la preparación de los tex-

⁶⁶ Juan Carrión, “Manejar el presente”, *Excelsior*, 3 de septiembre de 1992, p. 5.

⁶⁷ Jorge Teherán, “Parcial, interesada y prejuiciada, la historia en los nuevos libros de texto”, *El Economista*, 27 de agosto de 1992, p. 41.

⁶⁸ Martín Moreno, “Desconoce el SNTE los libros de texto gratuitos y le preocupa”, *El Universal*, 18 de julio de 1992, p. 4; Gloria Oliva Miranda, “Insuficiente el tiempo establecido para la actualización pedagógica: maestros”, *El Heraldo*, 10 de agosto de 1992, p. 9; Miguel Ángel Ramírez, “Marginó la SEP al SNTE en la preparación de los libros de historia”, *El Nacional*, 3 de septiembre de 1992, p. 13.

⁶⁹ Jorge Ignacio Rodríguez, “Hieren la historia los nuevos textos, afirma Carlos Jonguitud”, *El Financiero*, 2 de septiembre de 1992, p. 34.

tos escolares, subrayan que mes y medio antes del inicio del año escolar no conocían los libros de 1992 para los alumnos y consideran que no bastó el Programa Emergente Intensivo de Actualización del Maestro. Otros, más audaces⁷⁰ y dispuestos a explotar los esfuerzos gubernamentales un tanto fallidos por redefinir elementos del viejo nacionalismo oficial (al investirlos de significado tan novedoso que hacía caer las palabras en el absurdo), opinan que los manuales nuevos no fortalecen la soberanía ni la identidad nacional, con lo cual apuntalan, como lo hizo el PRD, el mito de que el reformismo selectivo de Salinas rompió con una práctica revolucionaria no menos falsa. Ciertamente es lógico que se identifique con ese pasado legendario un grupo cuyas pautas de relación con las autoridades capturan la esencia de las más antiguas tradiciones antidemocráticas, ocultas bajo la retórica.

Corrientes más agresivas del magisterio, que agrupa la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), coinciden con las observaciones anteriores, pero a diferencia de “institucionales” y moderados cuestionan contenidos específicos de los libros y proponen medidas para superar problemas que atribuyen a la falta de consultas. Varias notas periodísticas⁷¹ recogen reproches de que los nuevos manuales “[...] han sido deteriorados en su calidad”, son poco analíticos y carecen de referencias bibliográficas. La CNTE se pregunta si éstos enseñan “nacionalismo o patrioterismo” y critica —como antes lo hacían empresarios y clero— que los alumnos de las escuelas públicas no tengan acceso más que a los textos oficiales. Para subsanar estas deficiencias, la CNTE propone organizar un curso donde los maestros analicen el texto gratuito y declara que la dirigencia del SNTE recomendará a sus afiliados no limitarse a éste para impartir las clases de historia. De lenguaje más enérgico, el Movimiento Democrático Nuevo Sindicalismo (MDNS) condena⁷² la orientación de los nuevos libros y su presunta “es-

⁷⁰ Julio C. Aranda, “No reúnen libros de texto la calidad que requiere la modernidad educativa”, *El Universal*, 9 de agosto de 1992, p. 6; Guillermo Centeno, “Crítica un líder magisterial de Guanajuato los nuevos textos gratuitos de Historia”, *El Sol de México*, 17 de agosto de 1992, p. 1.

⁷¹ “Cuestionan profesoras de la CNTE los nuevos libros de historia de México”, *No-vedades*, 6 de agosto de 1992, p. 12; Lidia Vázquez García, “Son superficiales los contenidos de los nuevos libros de texto”, *La Jornada*, 7 de agosto de 1992, p. 17; Gabriela Flores, “Analiza la CNTE el material que proporciona la SEP”, *El Universal*, 9 de agosto de 1992, p. 25; Gabriela Flores, “Muchos maestros desconocen el proyecto educativo”, *El Universal*, 19 de agosto de 1992, p. 11; Rosa Elvira Vargas, “Usarán los maestros otras fuentes, además del nuevo texto de historia”, *La Jornada*, 25 de agosto de 1992, p. 10.

⁷² *Ibid.*

estructura catequista”, que reflejarían “[...] la ineficiencia del grupo burocrático responsable de la educación”. Son tres las grandes objeciones del MDNS a la “nueva” reseña de la historia, similares a las del PRD: que Díaz “haya dejado de ser un dictador”; que “no se mencionen” el Plan de Ayala, ni las luchas de Zapata y Villa, ni los “movimientos populares” en época reciente; y que “falte objetividad” en la narración de las elecciones de 1988. Reformulan estas opiniones con la mayor agresividad los líderes más radicales, cuyos vínculos con partidos de oposición dan fe de los límites del control que puede ejercer el gobierno sobre los grandes sindicatos y por conducto de ellos. Jesús Martín del Campo, líder del magisterio y diputado federal del PRD, anuncia⁷³ la preparación de un libro de texto “[...] paralelo” [para que] no se borre nuestra verdadera historia”, sin aclarar quién lo financiaría. Teodoro Palomino, dirigente del SNTE y del Partido del Trabajo, cuestiona⁷⁴ la credibilidad del llamado de Gordillo a examinar los libros y relaciona su edición con supuestas ambiciones políticas de Zedillo.

La idea primordial que se desprende del panorama descrito es que los manuales no interesan gran cosa a un magisterio ansioso por desplegar mayor influencia en la política nacional por cualquier medio, de preferencia chantajes con toques sentimentales que apelan a recuerdos inventados de una mitología izquierdista desgastada a fuerza de abusar de ella. Es justamente por eso que los libros, con su carga simbólica muy explotable, se vuelven materia prima ideal para alimentar rivalidades dentro del sindicato y brindan recursos a las facciones en pugna para mejorar su posición, con el propósito último de ejercer presiones sobre el Estado, al cual las unen vínculos que deberían ser de apoyo mutuo, pero en la práctica degeneran en desafíos y regateos, como es propio del clientelismo que en sistemas autoritarios atrapa con su lógica perversa a las dos partes en el juego por el poder. Queda en evidencia la heterogeneidad del SNTE pese a los esfuerzos del Estado por someterlo, y el hecho de que Gordillo transite de los elogios a las

⁷³ Esperanza Mazariegos Aguilar, “Mantienen los libros de texto el control político en la niñez: JMC”, *La Afición*, 15 de agosto de 1992, p. 10; Heliodoro Cárdenas Garza, “Crearán libros de historia paralelos a los oficiales”, *Últimas Noticias de Excélsior*, 28 de agosto de 1992, p. 1.

⁷⁴ “Acalorado debate en la Permanente sobre los nuevos libros de historia”, *Diario de México*, 3 de septiembre de 1992, p. 3; Juan Hernández Urbán, “Según nuevos libros de texto de historia, Bonampak, Chiapas, pertenece a Guatemala”, *Novedades*, 3 de septiembre de 1992, p. 7; Abigail Cruz Guzmán, “Demanda CNTE suspender el uso de los libros de historia de México”, *Tribuna*, 3 de septiembre de 1992, p. 17.

reservas cada vez que aumenta el descontento de partes del gremio, confirma esa ambigüedad de un sindicalismo leal en teoría, pero que vive anunciando rebeliones. Los maestros, en el fondo, no tienen alternativas que ofrecer: por eso su arma fundamental son amenazas más temibles por su efecto psicológico que por la posibilidad objetiva de cumplirlas, si bien el margen de incertidumbre al respecto amplifica su fuerza. La propuesta de las corrientes radicales de organizar foros de consulta alternativos, su promesa de publicar un libro de texto propio y su amenaza de pedir a los miembros del SNTE que descarten los textos oficiales, parecen poco creíbles en virtud de la pobreza de recursos de los maestros en conjunto, mas no carecen de eficacia en cuanto cuestionan la misión educadora del Estado mexicano, que ha sido bandera importante de sus esfuerzos por legitimarse. Apoyos inconstantes que fácilmente se tornan en sabotajes por medio de explotar fantasmas de símbolos muy arraigados todavía en el imaginario colectivo, ilustran los costos crecientes de gobernar sin el sustento de partidos políticos.

LOS MEDIOS PENSANTES

Si es importante la opinión de los maestros de primaria o de sus líderes por el doble motivo de que son los agentes últimos de la educación pública y constituyen una gran fuerza política, merece atención también la de los profesores universitarios, porque cabría esperar que tuvieran elementos para juzgar materiales educativos y ejercer liderazgo intelectual; es una desilusión descubrir que no suele ser así. Destaca en primer término, al leer una muestra de los artículos que escribieron investigadores o que recogieron sus opiniones, la coincidencia de este gremio con el de los maestros de educación básica en deplorar la falta de consultas; sorprende, sin embargo, la baja calidad intelectual de la mayoría de los argumentos en favor o, las más de las veces, en contra de los libros escolares. Son muy torpes algunas de las pocas alabanzas, por ejemplo, las de un renombrado investigador que elogia esos textos porque los produjeron colegas suyos muy reconocidos,⁷⁵ en tanto la mayoría de opiniones negativas llevan el sello del rencor de quienes esperaban que se les invitara a escribir los manuales.⁷⁶ Otra motivación usual de las críticas son actitu-

⁷⁵ Miguel José Yacamán, "Mentalidad crítica", *Excelsior*, 3 de septiembre de 1992, p. 5.

⁷⁶ Manuel Moreno Domínguez, "Mejorar los libros de texto preocupa a historiadores de la UNAM", *El Financiero*, 28 de agosto de 1992, p. 30.

des hostiles contra Estados Unidos, que destacan menos por su persistencia en el ambiente universitario mexicano que por lo primitivo de algunas de sus formulaciones, por ejemplo, la de un profesor de ciencia política en la UNAM, quien admite no haber leído los textos pero no vacila en diagnosticar que quieren “quedar bien con el capitalismo yanqui”.⁷⁷ Entre los muy pocos pronunciamientos que salvan el honor de los universitarios mexicanos,⁷⁸ varios son propensos al utopismo, en especial los que piden que participe la sociedad entera en la preparación de los manuales para asegurar la expresión de pluralidad.⁷⁹

Más separados del Estado, en principio, porque algunos de ellos no dependen de su afiliación a instituciones públicas de enseñanza superior que les paguen salarios de sobrevivencia, quienes aspiran a ser grandes figuras “autónomas” y líderes del medio pensante mexicano no se distinguen tanto de sus colegas investigadores por el temperamento o los dilemas existenciales cuanto por el grado de ambición, y a pesar de todo los une al poder público, a manera de cordón umbilical irrompible, el intenso deseo de asegurar su acceso al erario. Así parece demostrarlo un debate entre intelectuales-periodistas, donde el lenguaje oscila entre lo jocoso y lo extremadamente visceral, y que por momentos da la impresión de ser un pleito particular dentro de la polémica que desencadenaron los libros de texto, muy ilustrativo de la mezquindad del mundillo cultural mexicano, de sus fracturas y de su dualidad frente al Estado, porque la compulsión de criticarlo no es más fuerte que el anhelo de recibir su patrocinio.

Inicia la batalla Jaime Avilés en su artículo⁸⁰ que describe la controversia educativa como prolongación de la guerra entre las revistas

⁷⁷ Víctor Manuel Bautista López, “Desnacionalizante omitir y tergiversar la historia”, *El Día*, 3 de septiembre de 1992, p. 12.

⁷⁸ Josefina Vázquez, autora de la segunda serie de libros gratuitos, hace notar que los de la tercera, por abarcar cada uno toda la historia nacional, tienden a ser esquemáticos y enunciativos y no incluyen fragmentos de documentos de época ni otras lecturas; véase Manuel Moreno Domínguez, “Ocultan los libros de texto aspectos negativos del Porfirismo: historiadora Josefina Vázquez”, *El Financiero*, 2 de septiembre de 1992, p. 35. Por su parte, Soledad Loaeza Tovar, “Los libros de texto gratuitos y la tradición del Estado educador”, *La Jornada*, 4 de septiembre de 1992, p. 15, recuerda el argumento de Justo Sierra cuando hablaba del derecho del niño a ser educado libre de las restricciones de su medio, en el entendido de que sólo la autoridad pública puede garantizar la libertad individual.

⁷⁹ “Pide la investigadora Lorenza Villa concurso abierto para elaborar libros de texto gratuitos”, *Uno más Uno*, 3 de septiembre de 1992, p. 9.

⁸⁰ Jaime Avilés, “El negocio de la historia y la historia del negocio”, *El Financiero*, 13 de agosto de 1992, p. 51.

Nexos y *Vuelta*, que en teoría representan dos corrientes de actitud de los “intelectuales” respecto al poder público, aunque tal vez la diferencia entre las dos sea inferior a lo que ambas desearían; a partir de ahí llueven denuncias, recriminaciones mutuas, especulaciones obsesivas a propósito del uso de generosos recursos públicos y ataques estrictamente personales, sintomáticos del antagonismo entre camarillas en competencia por el reconocimiento del sistema político que denigran. En un segundo artículo,⁸¹ Avilés condena a las autoridades por no dar a conocer datos precisos del costo de los libros y divaga sobre la distribución de 1 600 millones de viejos pesos. También Miguel Ángel Granados Chapa parece expresar el rencor del grupo que perdió en la competencia por los favores del Estado, cuando condena la “entrega” del proyecto educativo a un grupo “excluyente e insuficientemente calificado”,⁸² y desarrolla ese argumento al hablar de “[...] una vasta operación de revisión ideológica que coincide con el acaparamiento, por un grupo, de los centros de decisión de la cultura y la información nacionales”,⁸³ la cual implicaría negocios de “gran cuantía”, pero su objetivo básico sería “[...] difundir propaganda favorable al régimen actual”. Sólo al final del segundo artículo Granados Chapa se ocupa de los libros en forma muy secundaria, que demuestra su reducido interés por ellos, y los ridiculiza por “apelar a la memoria”, no conectar fenómenos y ser repetitivos y mecanicistas, además de propagandísticos.

Esta nota da lugar a una respuesta del subsecretario de Educación, Pascual García Alba Iduñate,⁸⁴ cuyo argumento medular es que la SEP tomó decisiones con objetivos pedagógicos. Alba Iduñate dice que los gobiernos estatales y el SNTE aprobaron el Acuerdo Nacional para la

⁸¹ Jaime Avilés, “La paga de los historiadores”, *El Financiero*, 27 de agosto de 1992, p. 55.

⁸² Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, *La Jornada*, 18 de agosto de 1992, p. 10.

⁸³ Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, *La Jornada*, 20 de agosto de 1992, p. 10.

⁸⁴ Pascual García Alba Iduñate, “Precisiones sobre los nuevos libros de texto”, *La Jornada*, 21 de agosto de 1992, p. 18; Pascual García Alba Iduñate, “Respuesta a Miguel Ángel Granados Chapa”, *Uno más Uno*, 21 de agosto de 1992, p. 36. Las afirmaciones del subsecretario merecen atención no sólo en el contexto de la polémica entre “intelectuales”, sino por el hecho de que raras veces habló algún alto funcionario de la SEP —ni qué decir de la calidad de las declaraciones— en las primeras semanas del debate, quién sabe si por imprevisión de las autoridades, por falta de ideas o por el simple deseo de no alimentar la polémica. Es más lamentable por eso la pobreza de los argumentos de Alba Iduñate.

Modernización de la Educación Básica, subraya que numerosos grupos consultados sugirieron volver al sistema de asignaturas individuales, recuerda que es vieja la práctica de recurrir a talleres de impresión privados, destaca la calidad del equipo de autores y niega que los libros sean propagandísticos, porque el de sexto año dedica sólo un párrafo al gobierno de Salinas. Es llamativo que en su defensa de los manuales este alto funcionario tienda –al igual que la inmensa mayoría de los críticos– a dejarlos de lado, y ocurre otro tanto con la apología que hace de ellos uno de sus autores principales, pues brinda una descripción detallada del procedimiento para escribirlos que prescinde de argumentos razonados y de citas textuales, como si las formas importaran más que el fondo.⁸⁵ Otra respuesta proviene de Héctor Aguilar Camín,⁸⁶ quien primero denuncia con lujo de detalles que Granados Chapa tiene grandes intereses económicos en la industria editorial, luego afirma dogmáticamente que los nuevos libros son superiores a la serie previa.

La réplica de Granados Chapa⁸⁷ señala que la decisión de elaborar los textos fue anterior al acuerdo, que la pertinencia de volver a enseñar materias individuales no está bien establecida, y que no queda claro cuál de los casos previstos por la ley sirvió de base para recurrir a talleres privados. En un artículo posterior,⁸⁸ este periodista indica datos equivocados en los manuales, con minuciosidad rencorosa más que rigor intelectual. Finalmente, el historiador Enrique Krauze, quien el 6 de agosto publicó un artículo muy sarcástico⁸⁹ y controvertido⁹⁰ para sugerir que la descripción del porfiriato en los nuevos libros corresponde exactamen-

⁸⁵ Patricia Vega, "El estudio de la historia patria, primer aporte del nuevo libro de texto: Florescano", *La Jornada*, 24 de agosto de 1992, p. 23. Florescano hace hincapié en que sus libros incorporan conocimientos recientes (lo cual es indudable) y "rectifican" el error de "excluir la historia patria" de la formación de los niños (que no es muy buen argumento, porque nunca se dejó de enseñar esa materia, aunque fuera en combinación con otras).

⁸⁶ "Aguilar Camín responde a Granados Chapa", *La Jornada*, 21 de agosto de 1992, p. 7.

⁸⁷ Miguel Ángel Granados Chapa, "Plaza Pública", *La Jornada*, 1 de septiembre de 1992, p. 10.

⁸⁸ Miguel Ángel Granados Chapa, "Plaza Pública", *La Jornada*, 3 de septiembre de 1992, p. 10.

⁸⁹ Enrique Krauze, "¿Revisionismo en los libros de texto?", *La Jornada*, 6 de agosto de 1992, p. 3.

⁹⁰ Gustavo Hirales, "Ni tan porfirista, el nuevo texto", *El Nacional*, 7 de agosto de 1992, p. 9; Jorge Ojeda Ramírez, "¿Otra historia oficial?", *El Sol de México*, 8 de agosto de 1992, p. 4.

te al salinismo, a finales del mes se limita a desmentir⁹¹ que tuviera “acuerdos” con el ex secretario Bartlett respecto a la impresión de la serie, susceptibles de reeditar muy cuantiosas ganancias.

Quizá no sea muy útil preguntar si en la pugna entre las grandes figuras de la “intelectualidad” predomina una preocupación por el prestigio y la influencia ideológica o la mera ambición de enriquecimiento material (que de hecho suelen ir aparejadas), pero se termina por creer que en forma abrumadora es la segunda, a juzgar por la insistencia en el tema del dinero. Las pocas referencias a los libros mismos no parecen tener más propósito que servir de envoltura a los ataques personales, y la combinación de frivolidad y sarcasmo en casi todos los comentarios de los pensadores enemigos confirmaría su infinito desprecio por la educación pública durante el debate al que sirve de pretexto. El egocentrismo en el pleito particular entre figuras famosas de la cultura nacional, encapsulado en el debate más amplio del que es réplica en algunos momentos y negación en otros, sugiere también que los escritores mexicanos están aislados del resto de la sociedad, aunque ciertamente compartan con ella —e incluso amplifiquen— rasgos medulares de la conducta muy ambivalente que caracteriza su trato con el poder público.

Dejan una sensación de inquietud, ya que arrojan dudas sobre la capacidad profesional de quienes opinan, la baja calidad intelectual de la gran mayoría de los razonamientos presentados —cuando los hay— y el gusto muy reducido por la argumentación. Aunque sea natural que cada declarante espere ver reflejada su propia manera de pensar en los libros de texto, otra cosa es la falta de respeto por las preferencias políticas ajenas en un debate donde la presunta intelectualidad del país se abstiene de discutir respecto a ideas. La ausencia total de voluntad de diálogo refleja disposiciones muy poco democráticas, cuyo corolario y confirmación es una mentalidad de mafia que sustenta un sistema de alianzas personales ajeno a todo principio ideológico distinto del oportunismo, que explica también la desagradable visceralidad en los ataques. Si la falta de buenos hábitos de lectura exhibida en el combate revela desprecio profundo por la vida cultural de México, la ambición desmedida de riqueza entre escritores que son a la vez grandes empresarios —lo cual seguramente tiene efectos en su psique— pone en entredicho la legendaria espiritualidad del mexicano. Peor aún, los re-

⁹¹ Enrique Krauze, “En *Vuelta* no hay maniobras”, *El Financiero*, 31 de agosto de 1992, p. 87.

proches por no participar en la reforma educativa responden a una especie de inercia que les confiere carácter similar al de un reflejo o un gesto automático, desprovisto de sentido. Se vuelven lugar común las críticas por la falta de democracia, pero no constituyen en sí una alternativa de acción democrática, debido a la pereza con que se formulan, a su credibilidad reducida y al hecho de que la falta real de injerencia de la sociedad en la elaboración de las políticas por vías institucionales —no consolidadas en México todavía— a duras penas se compensaría con desarticuladas pretensiones participativas de una élite, contenidas en declaraciones frívolas que hacen la apología del asambleísmo, cuyo sustrato es una lógica chantajista.

Por otra parte, la evidencia de que la mayoría de los rencores que expresan algunos “intelectuales” obedecen al hecho de no disfrutar del patrocinio estatal para elaborar los programas educativos oficiales, sugiere que, por encima de supuestas divergencias ideológicas entre los favoritos y los excluidos, todos los miembros de la *intelligentsia* comparten un trasfondo de actitudes serviles frente al Estado. Las dificultades para concebir el ejercicio de influencia intelectual por conductos no estatales se manifiestan, por ejemplo, en que prácticamente todos los quejosos esperasen invitación de las autoridades a escribir los libros escolares, lejos de considerar la posibilidad de publicarlos por iniciativa propia, con miras a que su calidad les valiera reconocimiento. Además, todos aceptan implícitamente que las políticas del gobierno tengan carácter patrimonialista en vez de pasar por cauces impersonales, pues incluso los críticos más aguerridos lamentan menos la existencia de mecanismos autoritarios para la asignación de recursos públicos que el hecho de no ser sus beneficiarios. Lo anterior pone de manifiesto la dependencia psicológica y financiera de los intelectuales respecto al Estado, que compromete su profesionalismo y la objetividad de sus juicios, de modo que disminuye las bases de su capacidad crítica, aunque conserven aptitudes para hacer algo de ruido.

OBSERVACIONES FINALES

Empresarios tan agradecidos por la profesión de fe capitalista sin culpa del gobierno de Salinas que están dispuestos a olvidar su tradicional disidencia en materia de educación y a cubrir de lisonjas los nuevos manuales escolares, mas no se manifiestan totalmente complacidos por razones de principio; una Iglesia católica que hace otro tanto para que nada perturbe su luna de miel con el Estado, sin que le importen

en el fondo los programas educativos; la metamorfosis de la UNPE, que también se ha vuelto admiradora de los libros gratuitos, pero en vez de entregar completo su corazón sigue insistiendo en contribuir a mejorarlos; la disposición del PAN a borrarse como partido de oposición, con tal de ofrecer –en alianza con el gobierno– mejor resistencia a la izquierda; los chantajes sentimentales del PRD y su aliado espiritual próximo a la extinción, el PPS, que se envuelven en la bandera de la mitología revolucionaria –antes propia del gobierno, en teoría– para volverse cómplices del engaño al que sirvió con sus imaginarios usos y abandonos; la paradoja del magisterio, encuadrado en estructuras de control que lo restringen al tiempo que le facilitan ejercer presión y expresar disidencia para fortalecerse, según pautas que son la antítesis de la democracia, y un gremio académico propenso al narcisismo y casi tan ambivalente frente al Estado como las personalidades del medio pseudointelectual irremisiblemente caníbal, las cuales sostienen, obsesionadas por el uso de los dineros públicos, una relación de amor-odio con el gobierno y de rivalidad entre sí por los favores de éste, pues aunque digan despreciarlos no viven sin ellos: así puede resumirse el panorama del debate educativo de 1992.

Esta polémica a duras penas se refiere a los libros de texto que en principio la motivaron, pero da lugar a que afloren numerosos conflictos latentes en la vida mexicana y por ende refleja con fidelidad la política nacional; de su análisis se desprende que en ese año seguían intactas las prácticas e instituciones –y también, sobre todo, las mentalidades– a las que probablemente se deba la sobrevivencia “milagrosa” del sistema mexicano, que sería inconcebible si no se hiciera cómplice de ella la sociedad –mal llamada “civil”, porque su conducta no lo es– que vive en simbiosis con sus gobernantes. En este juego peculiar, los antiguos rivales del Estado (en especial la Iglesia) y sus hijos ingratos (es decir los empresarios) se transforman en amigos efímeros que nunca ofrecen lealtad completa; los aliados teóricos (sobre todo el sindicalismo “controlado”) en la práctica tienden a la traición, y los enemigos supuestamente irreducibles (léase la izquierda escindida del partido oficial) por ironías del destino actúan a menudo como aliados, quizá inconscientes. Todos comparten, sin embargo, la propensión a colaborar con el Estado forjador de ilusiones, y ninguno cuestiona de raíz los mecanismos de control tradicionales del poder público en México, pues cada grupo reacciona compulsivamente de acuerdo con expectativas del gobierno, como si hubiera un acuerdo silencioso para mantener la organización política vigente, tan arraigado –cual instinto– en la estructura psicológica de cada jugador que no haría falta concertación deliberada.

Ese marco mental compartido explica la especial importancia de las fantasías colectivas en México, en la que está la clave de la intensidad de las polémicas que despiertan representaciones imaginarias de la experiencia nacional en los libros de texto, alteradas al pasar por preconcepciones de quienes los utilizan; al peso de las creencias se debe también que esos debates pronto se conviertan en una especie de lucha metafísica, ella misma representación de otras pugnas, porque en la discusión respecto a los manuales escolares se adivinan siempre motivaciones subyacentes no relacionadas con la educación, dado que el meollo de antagonismos y afinidades siempre es otro, y hay convenio tácito de los participantes para mantener el engaño. Se acentúa esta dimensión de irrealidad en virtud de que la sustancia de la "controversia educativa" no son hechos tangibles, sino lo que cada contendiente supone que dicen, piensan y esperan los demás. El resultado paradójico de esta situación es que, a fuerza de regir su conducta por construcciones mentales muy separadas del plano material, la sociedad mexicana descuida algo indispensable para moldear mejores mentes, que es la educación primaria. Por otra parte, el fenómeno descrito parece congruente con el hecho de que la supuesta batalla por ideas sea el disfraz de ilimitadas ambiciones particulares que contribuyen al arraigo de la corrupción, en un contexto de cinismo, pragmatismo y oportunismo absolutos que habrían escandalizado a Maquiavelo, porque rebasan la amoralidad sobrentendida de la política al crear un caos en el que se vuelve casi imposible tipificar discursos e idearios como de "izquierda" o "derecha", al tiempo que se borran los linderos entre los ámbitos público y privado, lo cual es síntoma y causa de subdesarrollo político.

Eso no impide la funcionalidad del sistema, en cuanto permite al Estado gobernar y ofrecer recompensas o castigos a partidarios y detractores, pero a un costo que tal vez vaya en aumento, a juzgar por empeños declarados de ciertas agrupaciones (que se consideran disidentes) en instituir la democracia, no siempre creíbles ni encauzados por vías naturales como podrían ser los partidos, si tuvieran la fama necesaria. Pero incluso a la luz de signos de que el sistema actual estaría viendo comprometida la eficacia de su gestión cotidiana, para no hablar de problemas de legitimidad, no es claro que haya alcanzado un punto de deterioro en el que sea más onerosa su preservación que su desmantelamiento, porque mantiene aún con la sociedad nexos de cooperación bastante fluidos para vigorizarlo. Aunque esté mal visto extrapolar verdades de la psicología individual al plano de las colectividades humanas, en México es irresistible la tentación de comparar las relaciones entre Estado y sociedad con un matrimonio infeliz que no

quiere disolver sus vínculos perversos. Si no hace falta preguntar por qué desea sobrevivir el primero con sus rasgos distintivos, que es el impulso natural de toda organización, la mayor duda es por qué le brinda la segunda el sustento de su complicidad que de paso comprueba un precepto de sabiduría popular, según el cual un país tiene el gobierno que merece. Salvo que prefiera uno pensar que todas las élites mexicanas viven en connivencia, y por eso las masas continúan en la orfandad, al buscar una respuesta, habría que explorar la hipótesis de que tenga misteriosas ventajas para un pueblo entero la oportunidad de despreciar a sus gobernantes en permanencia.